

26.ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 11 DE 1885

Presidencia del señor MADERO

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alvear, Baibiene, Baltoré, Barros, Cambaceres, Carrillo, Dávila, Febre, Gelabert, Igarzábal, Juárez Celman, Mendoza, Navarro, Oliva, Ortiz, Rodríguez, Rojas y Zapata.

Senadores ausentes, con licencia: Avellaneda, Civit, del Valle y Gil.

Senadores ausentes, con aviso: Cello, Cortés, Moyano, Nougues, Pizarro, Rocha y Santillán.

Senador ausente, de la Capital: Bárcena.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Licencia al señor senador G. A. Moyano para faltar a las sesiones del corriente año, por tener que ausentarse de la Capital. Se acuerda.
- 3.—Integración de comisiones: se designa al señor senador Nougues para integrar la Comisión de Peticiones y al señor senador Baltoré para la de Negocios Constitucionales.
- 4.—Organización de los tribunales de justicia de la Capital. Continúa la discusión del proyecto, aprobándose hasta el artículo 68.

—En Buenos Aires, a once de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Avellaneda, Civit, del Valle y Gil, con licencia; Bárcena, ausente de la Capital; y Cello, Cortés, Moyano, Nougues, Pizarro, Rocha y Santillán, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 6 del corriente (25ª ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

1

Cámara de Diputados

Siete notas pasando en revisión los siguientes proyectos de ley:

1º Jubilando a la preceptora de escuela doña Matilde H. de Halbach.

2º Acordando pensión a doña Gertrudis Montero de Rojo.

3º Jubilando al preceptor del Colegio Nacional del Uruguay, don Domingo Vico.

4º Jubilando a don Pablo González, empleado de policía. A la Comisión de Peticiones.

5º Acordando pensión a doña Romualda A. Calcina.

6º Aumentando a cien pesos la pensión de que goza doña Antonia M. de Jáuregui.

7º Disponiendo el abono de cuatro mil pesos a la señora Casiana Uriarte de García, por suministros al Ejército Libertador del general Lavalle. A la Comisión de Guerra.

—Otra nota comunicando la sanción definitiva del proyecto de ley por el que se acuerda la suma de mil pesos por una sola vez a doña Luisa de la Motta Botello. Al archivo.

Solicitudes particulares

Salustiano Galup e Hijos solicitan la garantía de 7 por ciento sobre un capital de 2.000.000 de pesos para el establecimiento de una sociedad minera. A la Comisión del Interior.

—Doña Severina Alvarez solicita pensión, en mérito de los servicios de su hermano el teniente 1º Víctor Alvarez.

—Doña Josefa González de Saubidet solicita el pago de pensiones atrasadas. A la Comisión de Guerra.

—Doña Manuela Lozano de Piris, viuda del empleado de aduana don Juan Piris, solicita pensión.

—Don Jorge Paulson, profesor del Colegio Nacional de Córdoba, solicita su jubilación. A la Comisión de Peticiones.

2

Buenos Aires, Agosto 11 de 1885.

Señor presidente del Honorable Senado.

Teniendo necesidad de ausentarme de la Capital por asuntos personales, vengo, por intermedio del señor presidente, a solicitar del Honorable Senado el permiso correspondiente para ello, por todo el tiempo de las sesiones del corriente año.

Dios guarde al señor presidente.

at si

G. A. Moyano.

Sr. Presidente.—Como es de práctica, se considerará sobre tablas esta licencia.

—No haciéndose uso de la palabra, se vota y resulta afirmativa.

3

Sr. Presidente. — Para integrar la Comisión de Peticiones, a la que le faltará un miembro a causa de esta licencia, nombro al señor senador por Tucumán doctor Nougues.

Sr. Zapata. — Pido la palabra.

Ruego al señor presidente se sirva integrar la Comisión de Negocios Constitucionales.

Como está ausente uno de sus miembros, la Comisión no puede despachar asuntos de mucha importancia que tiene a su estudio.

Podría integrarse provisionalmente hasta tanto regrese el señor Gil.

Sr. Presidente. — Se nombra en calidad de provisional al senador por Entre Ríos doctor Baltoré.

Se va a pasar a la orden del día.

4

—Así se hace, leyéndose y dándose por aprobados los siguientes artículos:

Artículo 18. — Los jueces de paz darán audiencia diariamente durante el mismo tiempo que los demás tribunales, pudiendo habilitar horas y días feriados. Esas audiencias serán públicas, salvo el caso que en asuntos determi-

nados convenga al decoro hacerlas en reserva.

Art. 19. — Los jueces de paz podrán imponer multas hasta veinte pesos o arresto de 5 días por las faltas que se cometieren en las audiencias al respeto y consideración que les son debidos. Podrán también corregir a los empleados de sus respectivos juzgados con apercibimiento, suspensión temporaria que no exceda de quince días o multa que no exceda de veinte pesos.

Art. 20. — Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, los jueces de paz prestarán juramento ante el presidente de la Cámara de lo Civil de desempeñar cumplida y fielmente los deberes de su cargo.

Art. 21. — Los jueces de paz cumplirán las comisiones que les sean conferidas por los jueces superiores.

Art. 22. — Los jueces de paz que deban ser reemplazados por terminar su período, por renuncia u otra causa semejante, continuarán desempeñando sus funciones hasta que tomen posesión del cargo los que hayan de sucederles.

Art. 23. — La jurisdicción atribuida a los jueces de paz no comprende actos de jurisdicción voluntaria.

Art. 24. — Las resoluciones, órdenes y despachos de los jueces de paz deberán ser firmados por ellos y autorizados con la firma de un secretario.

Art. 25. — Los jueces de paz prestarán su cooperación para el desempeño de sus funciones a los defensores oficiales de menores e incapaces, y están obligados a ejercer vigilancia, en los límites de su sección, sobre esos incapaces y sus guardadores, dando cuenta a aquellos funcionarios de cualquier circunstancia que haga necesaria su intervención.

Art. 26. — Los jueces de paz conocerán de las demandas reconvenionales siempre que su importancia no exceda de la cantidad fijada como límite a su jurisdicción respectiva. Si excediese, el juez de paz se declarará incompetente para conocer de la reconvenición, pudiendo la parte demandada ocurrir al juez superior.

—Se lee:

Artículo 27. — El nombramiento de jueces de paz no podrá recaer en empleados públicos o miembros de la municipalidad.

Sr. Carrillo. — Pido la palabra.

Desearía que el señor miembro informante de la Comisión me diera la razón de esta inhabilidad que se establece para ser juez de paz a los miembros de la municipalidad.

Me explico que hoy, que los jueces de paz son propuestos por esa corporación, se procure que no recaiga el nombramiento en uno de sus miembros; pero mañana, cuando este proyecto sea ley y se ponga en vigencia, los jueces de paz serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

No encuentro entonces inconveniente para que a la vez presten estos servicios honoríficos, puramente concejiles, como son los municipales.

Me parece, pues, que el artículo puede reducirse a los siguientes términos:

«El nombramiento de jueces de paz no podrá recaer en empleados públicos», dejándolos así habilitados para ser municipales.

Sr. Baibiene. — Pido la palabra.

No veo la razón de este artículo, porque no ha de poder recaer el nombramiento en empleados a sueldo del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, o de cualquier otro poder.

Si es el Poder Ejecutivo quien los va a nombrar, y si por una ley en vigencia desde mucho tiempo atrás, la acumulación de empleos está prohibida quiere decir que no puede tener lugar esa acumulación: no le veo absolutamente razón de ser a la limitación.

Sr. Juárez Celman. — ¿Cuál es la ley que prohíbe la acumulación de empleos?

Sr. Baibiene. — No podría citar la ley, pero estoy cansado de oír hablar de ella.

Sr. Juárez Celman. — Hay una ley de la Nación que importa sancionar lo contrario, desde que establece que cuando haya un individuo que tenga dos empleos a sueldo, goce el sueldo mayor íntegro, y la cuarta parte del menor.

Entonces, es muy oportuno este artículo, cuando se trata de jueces que deben ser completamente independientes de los otros poderes; y no lo serían suficientemente, si fueran empleados a sueldo del Poder Ejecutivo.

Sr. Baibiene. — La base de mi criterio la conocen el señor senador y la Cámara.

Creía que existía una ley que prohibía la acumulación de empleos, y entonces suponía que la prohibición se refería exclusivamente al nombramiento no a la acumulación del empleo de juez de paz con el otro que tuviera ya el nombrado; y el alcance del artículo es probablemente que no se puede acumular este empleo con otro.

Así es que está bien, y si es así no me opongo.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

El artículo que está en discusión no es introducido por la Comisión: es el mismo artículo de la ley vigente. El Poder Ejecutivo no lo reformó en su proyecto, y la Comisión tampoco ha creído conveniente hacerlo.

Sin embargo, el señor senador por Jujuy lo observa diciendo que le parece bien que quede la prohibición de ser juez de paz, en cuanto se refiere a los empleados públicos.

Sobre este punto me parece que no hay discusión, porque entiendo que la indicación propuesta por el señor senador por Corrientes la ha abandonado él mismo.

Queda, pues, en discusión lo que se refiere a los municipales, a los que también se les prohíbe que puedan ser jueces de paz.

Decía el señor senador por Jujuy que no cree que haya incompatibilidad entre el puesto de municipal y el de juez de paz.

Creo que hay inconveniente, y que el artículo, tal cual está, debe mantenerse.

No creo propio que en un mismo individuo se reúnan dos empleos, y absolutamente impropio, si son tres.

Debemos, pues, procurar, en cuanto sea posible, que los empleos sean desempeñados por un solo ciudadano, porque así pondrán toda su consagración, estudio e inteligencia con toda decisión al buen desempeño de su empleo.

Si se obliga a un hombre a repartirse en varios empleos, tiene que repartir sus cuidados, atención e inteligencia en tantos empleos cuantos tenga.

Ya que no hay escasez de ciudadanos para desempeñar, ya los puestos concejiles, ya los empleos de jueces de paz, debemos, en cuanto sea posible, tender a que un individuo no desempeñe dos puestos. El servicio público estará así perfectamente desempeñado.

He ahí las razones del artículo; creo que el Senado debe mantenerlo tal como está.

Sr. Carrillo. — Pido la palabra.

Las razones que ha dado el señor miembro informante estarían perfectamente bien si comprendiesen a todos los miembros de la administración de justicia de la Capital; pero precisamente vienen a aplicarse única y exclusivamente a los jueces de paz.

Sr. Febre. — Es que aquí se trata de los jueces de paz. El señor senador, en el lugar oportuno, puede proponer la agregación que indica. Yo lo acompañaré con muchísimo gusto.

Sr. Carrillo. — No voy a proponer ninguna agregación, sino que por el contrario, he de pedir que se suprima mucho de lo que hay en este proyecto sin ventajas para el mejor servicio público.

Sr. Febre. — Proponga el señor senador las supresiones que quiera, y el Senado las aceptará si las cree convenientes.

Sr. Juárez Celman. — Parece que la obser-

vacación del señor senador por Corrientes tiene razón de ser.

Recién veo el artículo y no lo encuentro bien. No dice que los jueces de paz no pueden ser empleados a sueldo, sino que no puede recaer el nombramiento de juez de paz en un empleado público. Se puede nombrar juez a un empleado cualquiera, y él optará por uno u otro puesto.

Sr. Febre. — Lo que dice el artículo se comprende perfectamente: que no puede tener a la vez los dos empleos.

Sr. Juárez Celman. — Me parece más correcta la redacción propuesta por el señor senador por Jujuy.

Sr. Febre. — No hay oposición.

Sr. Rojas. — ¿Cuál es esa redacción?

Sr. Presidente. — ¿El señor senador por Jujuy propone una nueva redacción?

Sr. Carrillo. — No, señor.

Sr. Juárez Celman. — Yo lo propongo en esta forma: «No podrá desempeñar las funciones de juez de paz ningún empleado público o miembro de la municipalidad.»

—Se vota el artículo en esa forma y se aprueba, lo mismo que sin observación los siguientes:

TITULO II

De los jueces de mercado

Artículo 29. — En cada uno de los mercados de frutos del país establecidos, o que en lo sucesivo se establecieren en el municipio de la Capital, habrá un juez de mercado.

Art. 30. — Cada juez tendrá dos suplentes que lo reemplacen en los casos de recusación, ausencia u otro impedimento legítimo.

—Se lee:

Artículo 31. — Los jueces de mercado conocerán en primera instancia, sea cual fuese la importancia del asunto, siempre que las partes reconozcan la existencia de un contrato, en todas las cuestiones relativas a las transacciones del mercado, que versen:

- 1º Sobre entrega de ganados y frutos;
- 2º Sobre fletes de los trasportes terrestres en que los frutos hayan sido conducidos;
- 3º Sobre exactitud de pesos y medidas.

Sr. Juárez Celman. — Me llama la atención que los jueces de mercado puedan entender cualquiera que sea la importancia del asunto con tal de que haya la existencia previa de un contrato.

Sr. Febre. — Esta sección de la ley es la misma que está vigente y que en la práctica no ha recibido ninguna objeción.

Sr. Juárez Celman. — Estos jueces no son letrados y los jueces de paz que lo son tienen limitado a mil pesos el valor de las causas sobre que pueden entender.

Sr. Febre. — Es que aquí se trata de las cuestiones que se suscitan diariamente en los mercados y que requieren una resolución rápida.

Sr. Ortiz. — Muchas veces no hay duda sobre los contratos y las cuestiones nacen de ciertas condiciones que pueden ocurrir en el momento de la entrega de las cosas.

—Se vota el artículo y se aprueba, lo mismo que los artículos siguientes:

Artículo 32. — Cuando el valor cuestionado no excediera de cien pesos, la resolución de los jueces de mercado hará cosa juzgada.

Art. 33. — Habrá también en cada mercado un tribunal de segunda instancia, compuesto de tres jueces titulares e igual número de suplentes.

Art. 34. — Este tribunal conocerá en segunda y última instancia en las apelaciones de las resoluciones de los jueces de mercado en asuntos en que el valor de la cuestión exceda de cien pesos.

Art. 35. — Los jueces de mercado, los miembros del tribunal de segunda instancia y sus respectivos suplentes serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la municipalidad, de entre los comerciantes de cada mercado, con designación del que haya de presidir el tribunal de segunda instancia.

Art. 36. — El cargo de juez de mercado, tanto en primera como en segunda instancias, es gratuito; ningún comerciante en quien recaiga el nombramiento podrá excusarse de aceptarlo, a menos que se funde en causas notorias que le impidan la asistencia al mercado o en haber desempeñado las mismas funciones el año anterior.

Art. 37. — El que sin excusarse o después de haberse desechado su excusación se negase a desempeñar el cargo, pagará una multa de quinientos pesos.

Art. 38. — Los jueces serán nombrados por un año, pero no cesarán en el ejercicio de sus

funciones hasta que los designados para reemplazarlos hayan tomado posesión del cargo.

Art. 39. — Los tribunales de primera y segunda instancias de cada mercado tendrán un secretario y un ordenanza, que gozarán del sueldo que les fije el presupuesto.

El nombramiento de estos empleados será hecho por los tribunales respectivos.

Art. 40. — Los jueces de mercado podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo con justas causas; y los secretarios y ordenanzas por los mismos jueces.

TITULO III

De los jueces de primera instancia

CAPÍTULO I

De los jueces de lo civil

Art. 41. — Los jueces de lo civil de la Capital conocerán en primera instancia de todos los asuntos seguidos por las leyes civiles, con las limitaciones prescriptas en la presente ley y en la de procedimientos.

Art. 42. — Conocerán igualmente en segunda y última instancia de las apelaciones y demás recursos que se interpusieren contra las resoluciones de los jueces de paz en negocios civiles.

Art. 43. — Sus sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia para ante la respectiva Cámara de Apelaciones.

CAPÍTULO II

De los jueces de comercio

Art. 44. — Los jueces de comercio entenderán en primera instancia en todos los asuntos regidos por el código y leyes de comercio, con las limitaciones establecidas en esta ley y en la de procedimientos.

Art. 45. — Conocerán igualmente en segunda y última instancia de las apelaciones y demás recursos que se promovieren contra las resoluciones de los jueces de paz en materia comercial.

Art. 46. — Sus sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia para ante la respectiva Cámara de Apelaciones.

CAPÍTULO III

De los jueces de lo criminal

Art. 47. — Mientras no se establezca el juicio por jurados, la administración de justicia de lo

criminal en primera instancia será desempeñada por jueces de instrucción y de sentencia.

Sr. Carrillo. — Me parece, señor presidente, que no ofrece ventajas ni satisface necesidad alguna esta novedad que introduce la Comisión en la averiguación y castigo de los delitos o crímenes que se cometan en el municipio de la Capital.

No puede haber conveniencia en que se establezcan jueces para la averiguación de los delitos y se creen otros que estén de brazos cruzados mientras les llega la oportunidad de pronunciarse en ellos, reprimiéndolos con la pena especial que el código señala. No se puede esperar tampoco que el juez de sentencia pueda apreciar debidamente la responsabilidad o el grado de culpabilidad del autor o cómplice de un delito, si ha de proceder con el criterio de otro funcionario que sería el encargado de la organización y procedimiento a seguirse en los sumarios; porque es evidente, que según sea la manera de producir la prueba y de efectuar la averiguación de los hechos, quedará más o menos bien esclarecida la responsabilidad del autor de ellos.

La justicia criminal existe hoy tal cual la encontró la Constitución del año 60. El Congreso no ha dictado ninguna ley al respecto, porque ha debido tener presente la prescripción constitucional que le ordena no hacer modificación ninguna para administrarla, sino aquellas que sean exigidas para establecer el juicio por jurados.

Cuando el Congreso quiera ocuparse de materia criminal, o tiene que mantener las cosas tal como están, o instituir el juicio por jurados como se lo prescribe la Constitución.

Esta división, pues, entre jueces de sentencia y jueces de instrucción, no es lo que quisieron los constituyentes, ni responde a ninguna necesidad sentida que pudiera disuadirla.

Los jueces de lo criminal desempeñan satisfactoriamente sus funciones, sin que haya habido una voz que se levante quejándose por su retardo o de la mala aplicación del sistema seguido hasta hoy.

Los jueces del crimen, sea cual fuere el número de causas que entran a su despacho, están al día. He sido informado por persona autorizada — y consta también en la memoria de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal — que este servicio está perfectamente desempeñado por los dos jueces actuales.

Evidentemente no hay necesidad de este aumento de personal que no daría otro resultado

que hacer muy oneroso el sostenimiento de la administración de justicia, con perjuicio del pueblo que la paga.

Por estas razones desearía que se haga una votación especial de este artículo a fin de negarle mi voto.

Sr. Febre. — El señor senador por Jujuy concluye sus observaciones al artículo que está en discusión, diciendo que no hay una necesidad públicamente sentida que exija esta reforma, y agrega en corroboración de esta afirmación el haber leído el informe de la Cámara de lo criminal y las declaraciones de algunos de los abogados de la Capital, que dicen que la justicia criminal está perfectamente servida, refiriéndose a las aptitudes de los funcionarios que desempeñan estos puestos.

Yo no dudo, señor presidente, que estos funcionarios cumplan siempre con su deber y que con razón se diga que desempeñan bien sus funciones; pero me parece que el señor senador por Jujuy no está bien informado respecto a las necesidades públicas que reclaman esta reforma, necesidades que se satisfacen con este artículo.

Yo he visto en los diarios de esta Capital frecuentes quejas por el largo tiempo que mantienen en prisión a los procesados, sin resolver las causas. Algunas veces, después de seis años, recién el juez ha mandado sobreseer en la causa porque no había mérito para proceder contra el acusado.

Esto lo saben muchos de mis colegas.

Sr. Carrillo. — No lo refiere la memoria de la Cámara.

Sr. Febre. — Me estoy refiriendo a lo que dicen los diarios, si en la memoria no han consignado algo de la que publican los diarios, será porque a su juicio no lo han juzgado de importancia.

El Poder Ejecutivo ha creído atender esta necesidad sentida y estas reclamaciones de la prensa con esta reforma, y la Comisión no ha tenido inconveniente en aceptarla, pero el señor senador por Jujuy hacía otra observación y decía que creía que no era conveniente esta nueva clase de jueces que se viene a crear, porque mientras los jueces de instrucción hacen el sumario para que pase al juez de derecho, éste va a estar cruzado de brazos.

Los jueces en lo criminal tienen muchos asuntos a resolver y no han de esperar a que haya aglomeración de sumarios para dictar las sentencias, porque hay otros expedientes que esperan la resolución del juez.

Nos decía también el señor senador por Jujuy que la Constitución no ha previsto el caso

de estos jueces de instrucción y que por lo tanto, el Senado está inhibido de dictar una ley que los establezca.

Sr. Carrillo. — El señor senador no me ha comprendido bien...

Sr. Febre. — Quizás no le he oído...

Sr. Carrillo. — He dicho que a mi juicio es más conveniente mantener la administración de justicia criminal en las condiciones en que está actualmente y que en caso de introducir reformas sean las que la Constitución ordena, porque la Constitución ordena que el Congreso dicte leyes para la administración de justicia criminal, estableciendo el juicio por jurados. Ese es el precepto de la Constitución.

Sr. Febre. — Perfectamente; pero no está inhibido el Congreso para dictar leyes sobre justicia criminal y me parece que estos jueces de instrucción no van descaminados a llegar al objeto que se ha propuesto la Constitución. Todavía el país no está en condiciones de establecer el juicio por jurados y es esa una de las razones porque esa ley no se ha dictado aún.

Creo, señor presidente, que el artículo es á bien, y espero que el Senado lo sancione.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Yo encuentro, señor presidente, de gran peso las observaciones que ha hecho el señor senador por Jujuy; me parece que tiene razón en todo; pero, a pesar de tener razón, se le puede contestar muy bien con los antecedentes que existen en el país respecto a estos puntos.

La teoría en virtud de la cual se ataca la institución de jueces instructores es conocida de todos los miembros del Senado; no tengo para qué recordar la teoría en virtud de la cual se defiende esa institución; es también muy conocida y me eximo de mencionarla; y, en suma, pesadas las dificultades y conveniencias, me parece que la Cámara haría bien en inclinarse a establecer el examen por los jueces instructores; reconociendo, sin embargo, que hay gran peso en la observación que tiende a invalidar esa opinión.

Hay otra observación que ha hecho el señor senador, que es de más peso también, y es la siguiente: mientras no se ocupe la Cámara de dictar la ley de juicio por jurados, el Congreso no está habilitado para dictar ninguna ley de procedimiento en lo criminal. Esta observación es incontestable; indudablemente no se puede ocupar la Cámara, no se puede ocupar el Congreso, de dictar leyes de procedimientos en materia criminal, mientras subsista en la Constitución la prescripción de: «establecerá el juicio por jurados».

Sin embargo, ya lo ha hecho el Congreso. Esta ley, que estamos reformando ahora, es una violación de ese artículo constitucional, porque establece en cierto modo un procedimiento para asuntos criminales en la Capital.

Ahora, yo creo que todo puede corregirse en las presentes sesiones, porque ante la Cámara de Diputados está pendiente un proyecto de ley estableciendo el juicio por jurados.

Entonces, todos estos acápites se borrarán una vez que se haya establecido el juicio por jurados; para el caso que no lo establezca, se halla también pendiente de la discusión de la Cámara de Diputados un proyecto de procedimiento en la materia criminal, como se hallan también los demás códigos, de procedimientos en lo civil, etcétera; el Código Penal, el Código de Comercio y otras leyes que afectan a la administración de justicia.

Luego, hallándole mucha razón al señor senador, soy, sin embargo, de opinión de que la Cámara sancione este artículo como viene, en previsión que no se dicte este año la ley de juicio por jurados: se tomará esto como una forma transitoria, como un *modus vivendi* en cierto modo contraria a la Constitución, pero necesario en esta época de transición en que estamos, y esta ley existirá entonces con el mismo carácter y el mismo título con que existían las leyes de procedimiento que regían en la provincia y que continuaban rigiendo en la Capital.

He dicho.

Sr. Baibiene. — Yo voy a votar los artículos éstos, pero entendiendo que no voto una ley contraria a la voluntad de la Constitución. Para mí no es esta una ley de procedimientos, es una ley que organiza los tribunales, que es de un carácter, de alcance muy distinto a la ley de procedimientos.

Sr. Zapata. — Y si fuera de procedimiento, como este es el municipio de la ciudad capital, es el Congreso el que puede darla.

Sr. Baibiene. — Sí; pero la Constitución prescribe que debe establecerse el juicio por jurados; por consiguiente, no debe establecerse el juicio en otra forma. Estos tribunales van a administrar la justicia exactamente como se está administrando ahora.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — El señor senador me permitirá observarle que precisamente el establecimiento de jueces instructores es una entidad esencialmente de procedimiento, no es de fondo. Juicio instructor, quiere decir que se ha de proceder a dilucidar un juicio criminal, «procedimiento».

Sr. Carrillo. — Las últimas palabras que se han emitido, señor presidente, en la Cámara deben haber persuadido a la generalidad de mis honorables colegas, que lo mejor, que lo más acertado que haríamos, sería dejar las cosas como están; no innovar nada, desde que el miembro informante de la Comisión ni el señor ministro de instrucción pública han tenido la amabilidad de manifestar cuáles son las razones de conveniencia que hagan indispensables estas reformas y cuál sea el objeto de crear jueces de instrucción, habiendo en la actualidad, como hay jueces de instrucción y de sentencia al mismo tiempo, y comisarios de policía, que organizan las primeras diligencias del sumario.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Yo no he manifestado las razones, porque creía que estaban en el ánimo de todos los señores senadores.

Sr. Carrillo. — Al contrario, en el mío no están porque, como dije al principio, yo he leído la memoria de la Cámara de Apelaciones de la Capital y ella demuestra que las causas criminales que tienen los jueces, hoy no son sino cuatrocientas, doscientas cada uno; con este agregado de que en el año pasado han habido doscientas y tantas causas menos iniciadas.

Luego, en vez de recargarse el trabajo de los jueces de instrucción y de sentencia, se va disminuyendo a medida que vamos progresando en civilización.

Pido, pues, que se vote el artículo tal cual está.

Sr. Febre. — Yo creía que había explicado al señor senador por Jujuy las razones capitales de este artículo, cuando él hizo su primera observación.

Decía yo, señor presidente, que estos jueces de instrucción tenían el propósito de facilitar la expedición de los asuntos criminales y que venían a llenar una necesidad bien sentida, porque todos los señores senadores lo saben, la prensa constantemente está denunciando hechos y haciendo cargos a la justicia criminal del país por el largo período de años que se tienen en sumario las causas de una porción de desgraciados que se encuentran sometidos a la justicia criminal y después de seis, siete u ocho años recién viene a sobreesérseles las causas, mandándolos poner en libertad por no haber mérito para que continúen detenidos.

Todas estas dificultades vienen a subsanarse con el establecimiento de los jueces de instrucción; no es una novedad esto. Es una novedad en la división de las funciones del juez

del crimen, porque esta instrucción del sumario la hace hoy el juez del crimen.

Entonces, para facilitar la expedición de los asuntos criminales, va a nombrarse un juez que haga la instrucción, que haga el expediente y pase después al juez de derecho.

No entiendo, como dice el señor ministro, que esto es inconstitucional; porque, si así fuera, yo, cualquiera de los miembros de esta Cámara, todos los señores senadores, votarían en contra del artículo. Creo que estamos perfectamente dentro de los términos de la Constitución. La Constitución manda que en los juicios criminales debe establecerse el juicio por jurados, pero no inhibe a las Cámaras de dictar leyes mejorando el procedimiento actual.

Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos mejorando, el sistema que había cuando se dictó la Constitución, hasta que lleguemos a la época en que podamos establecer el juicio por jurados; no hacemos nada contrario a la Constitución, porque ninguno de los señores senadores se atrevería a votar un proyecto contra la Constitución, ya contra su espíritu, ya contra su texto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Señor presidente: me parece a mí de una claridad sorprendente esta proposición.

Si la Constitución manda que el Congreso dicte una ley estableciendo el juicio por jurados en lo criminal, el Congreso no puede ocuparse de nada referente a lo criminal sin establecerse el juicio por jurados. Solamente puede dejar de cumplir la Constitución a condición de estar callado sobre justicia criminal; pero en el momento que se pronuncie una palabra sobre justicia criminal, tiene que hacerse de acuerdo con la Constitución que manda establecer el juicio por jurados. Esto es para mí muy claro.

Yo no entraré a la discusión de este punto, porque desde que ya estamos a punto de hacer este ensayo, para el cual me parece que el país está tan preparado como cualquier país del mundo, y mucho mejor que otros países que se dicen más civilizados que el nuestro pero en donde, tomados individualmente los habitantes, no les reconozco superioridad; ya que estamos a punto de establecer el juicio por jurados, me parece inútil entrar a discutir si el Congreso está faltando a la Constitución o si va a faltar nuevamente a ella.

Ahora, contestando al señor senador, debo decirle que no entré en esa materia, la materia que él indicaba que no había explicado bien,

porque creía que las ideas de los señores senadores al respecto estaban ya hechas.

Discutir en teoría las conveniencias de los jueces instructores, me parecería inútil. Sin embargo, apuntaré las razones fundamentales que los combaten.

Se dice que los jueces instructores quiebran la continuidad de los juicios, es decir, de los raciocinios, de los motivos de investigación en los procesos y hacen intervenir dos inteligencias distintas, es decir, dos instrumentos para un acto que debe tener cierta unidad.

Así, el juez que sentencia, por ejemplo, no tiene todos los elementos de juicio si no ha hecho él mismo el sumario; por una razón muy sencilla, porque el juicio no brota, no se establece de pronto, no brinca, no salta en la cabeza; se va formando poco a poco y uno va, mientras que estudia, corrigiendo su juicio, mientras que analiza, aumentando o disminuyendo ciertos datos y del conjunto, de todo esto resulta el juicio. Así, el juez que hace un sumario y va a hacer una sentencia, tiene hecho el comienzo de la sentencia desde que ha comenzado a estudiar el caso; mientras que cuando hay un juez instructor, el juez instructor no es una simple máquina para levantar antecedentes; reúne los antecedentes, según su juicio, y luego, según su juicio, va comentando los hechos, un poco según la razón, un poco según su espíritu; de modo que, cuando concluye el sumario, forzosamente el juez está inclinado a una sentencia; y le presenta eso al juez de sentencia, lo obliga, en cierta manera, llenando el mismo papel de los relatores en las cámaras que hacen el extracto del texto de un expediente; le presentan el resultado del trabajo a la cámara; la cámara resuelve, generalmente de acuerdo con lo insinuado por el relator. Indudablemente, esa es una gran crítica que hace al procedimiento, pero en cambio él tiene sus ventajas.

¿Qué tiene que el juez instructor induzca al juez de sentencia a tomar una resolución? Al fin y al cabo, el juez instructor es abogado, como el juez de sentencia; el juez instructor puede tener tan buen criterio como el juez de sentencia, y en cambio la reforma tiene la inmensa ventaja de que no pudiendo el juez de sentencia repicar y andar en la procesión, el juez de instrucción hace el sumario, prepara todos los elementos y acorta, de una manera increíble, la duración de los procesos, que es mucha.

Al fin y al cabo, se trata, en los asuntos criminales, de una gran cosa, de la libertad de

un individuo, y quitarle a un individuo un solo día de libertad es un verdadero crimen; luego, todo lo que se haga para disminuir el tiempo en el cual la sociedad le quita por la razón h ó b, la libertad a un individuo, es un buen acto.

En este sentido, sin ser partidario fundamental de los jueces de instrucción, soy sostenedor de ellos.

Nada más tengo que decir.

Sr. Juárez Celman. — Voy a votar por la supresión propuesta por el señor senador por Jujuy, por esta sola razón.

Creo que la reforma, en este caso, sólo podría ser justificada por razones de economía o de recargo de trabajo para los jueces de sentencia; y el señor senador nos dice que la memoria presentada por la corte demuestra que las causas criminales disminuyen notablemente. Además, me parece que hasta ahora no ha habido absolutamente cargo alguno respecto a retardo de justicia en los tribunales del crimen: todo lo contrario de lo que sucede en los tribunales de lo civil. Esta razón, que sería la única que podría inducir a hacer un aumento de personal, desaparece completamente por el mismo informe de la Cámara de Justicia.

No siendo esta razón, sólo podría ser la de ponernos dentro de la prescripción constitucional; pero aun cuando participo en parte de la opinión del señor senador por Entre Ríos de que esta reforma, no es absolutamente contraria a la Constitución ni se aparta de la misma, creo que sería más conforme a la disposición constitucional que mientras el Congreso no puede legislar en el sentido del jurado, no debe hacerla, porque se aparta indudablemente de este consejo de la Constitución, aunque el hecho de hacer una pequeña innovación en la ley orgánica no importa llevarse por delante la Constitución.

Sin embargo, creo que la cuestión está reducida a ésta, a saber: ¿qué significa esta innovación?

Significa facilitar el trabajo a los jueces de sentencia.

¿Ha hecho presente la Cámara de Justicia que está muy recargada? Al revés; dice que van disminuyendo las causas criminales.

Entonces, ¿a qué responde este aumento de personal?

Aunque no fuera más que por economía, debe suprimirse.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Indudablemente, los juicios en lo criminal, están retardados: todos los días oímos

quejas de que los procesos duran más del tiempo necesario.

Sr. Juárez Celman. — La cámara no dice eso.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — La cámara dice que estamos mejor con relación a épocas pasadas; pero no estamos enteramente bien; y prueba de ello es que los jueces, al pedir ser trasladados al centro — despachan actualmente en el Cabildo — daban como razón de la duración de los procesos, la imposibilidad de obligar a los testigos a concurrir a la penitenciaría, donde ellos antes ejercían sus funciones.

Esta ley de procedimientos, que obliga a hacer la verdad con la deposición de testigos, es un entorpecimiento grande, una traba fundamental para el juez de sentencia que tiene que andar en busca de los testigos, y este trabajo se facilitaría mucho con los jueces de instrucción.

No es tampoco exacto que estemos en un estado tan perfecto respecto a la tramitación de estos juicios: todos los días hay quejas de retardo de justicia y hay individuos que pasan mucho tiempo encarcelados sin que se les pueda tomar declaración, porque el juez no puede atender a tantos.

Yo creo, pues, señor presidente, que han conveniencia en establecer los jueces de instrucción.

Sr. Carrillo. — Pido la palabra.

Voy a manifestar simplemente que las observaciones que he hecho han sido, como he dicho antes, fundadas en el informe de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, que tengo a la mano, del cual voy a leer la parte pertinente para que los señores senadores se convenzan.

Dice: «El despacho de las causas en los juzgados de lo criminal, correccional y comercial, ha sido satisfactorio durante el año.»

¿Cómo puede ser satisfactorio si hay retardo de justicia, si es exacto lo que asevera el señor senador por Entre Ríos?

Sr. Febre. — Relativamente.

Sr. Carrillo. — En otra parte, dice: «Se han iniciado 104 causas menos que en 1883, a pesar del aumento considerable de la población de la Capital...»

En otro párrafo determina las causas que quedan pendientes y dice: «De estas causas han sido concluidas tantas por el juzgado de lo criminal y por el de lo correccional, quedando en el primero una existencia de 402 causas, de las cuales 29 criminales y dos correccionales están en apelación.»

No es, pues, un trabajo impropio que exija crear dos jueces de instrucción, como lo proyecta la Comisión, a más de los jueces de sentencia, es decir, duplicar el número de jueces en lo criminal para desempeñar un servicio que gradualmente va disminuyendo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero un dato sólo, la observación de un año, no induce una generalización, como la hace el señor senador.

Sr. Carrillo. — Pero basta para demostrar que no hay necesidad de aumentar el número de jueces.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero es necesario saber leer las memorias...

Sr. Carrillo. — Muchas gracias.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ... y le recomiendo esto al señor senador.

¿Qué quiere decir satisfactorio? Quiere decir con relación a lo que pasaba antes, que era atroz.

Estas mismas cifras son criticables; no debiera haber tantas causas pendientes: el despacho debiera estar al día, porque se trata de lo más grande que tiene el hombre, de su libertad. Que dure un asunto en lo civil, todavía se comprende, porque sólo se trata de intereses; pero en un asunto criminal, cuando un individuo está detenido quizás ilegítimamente, el juez no debe torear con dificultades para despachar su asunto, por su misma seriedad e importancia.

Y entonces un gasto, en contraposición de esta gran ventaja, de la pronta expedición de los asuntos criminales, debe ser hecho.

Debo advertir otra cosa al señor senador y a la Cámara: que no hay nada que sirva de pretexto en el extranjero para criticarnos, como estos asuntos criminales.

Si el señor senador leyera los diarios extranjeros, vería a cada momento denuncias respecto a individuos que han sido presos, a quienes no se les ha tomado declaración y cuyos asuntos no han sido substanciados ni sentenciados; y una de las cosas que más llama la atención fuera de aquí, es el retardo en la justicia criminal.

Por eso es deber nuestro hacer todo lo posible, aunque fuera con un gasto relativamente grande, para que los juicios en lo criminal sean sumamente rápidos.

Sr. Juárez Celman. — El señor ministro habrá visto también muchas veces en los periódicos ilustrados europeos, láminas representando

a un individuo joven que ha sido encarcelado, y que luego sale viejo, después que ha sido reconocido inocente.

La crítica se hace en todas partes.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Sí, pero a ellos no les importa gran cosa la crítica, mientras que para nosotros la crítica quiere decir falta de inmigración.

Sr. Juárez Celman. — La inmigración que va a las cárceles no la necesitamos.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 46, ahora 47.

--Se vota y resulta afirmativa de 9 votos.

--Se aprueban igualmente los siguientes:

Artículo 47. — Los jueces de instrucción formarán los sumarios:

1º. En todos los juicios por delitos que, según las leyes de procedimientos, corresponden a la jurisdicción de la Capital, en los que puede imponerse pena corporal que exceda de un año de duración o de multa por más de mil pesos;

2º. De las causas por defraudación de rentas fiscales cuando provengan de impuestos establecidos exclusivamente para la Capital.

Art. 48. — Terminada la instrucción de la causa, remitirán los autos al juez de sentencia poniendo a su disposición el preso o presos si los hubiere.

Art. 49. — Los jueces de sentencia dictarán la que corresponda en los autos que les sean remitidos por los jueces de instrucción conforme a la ley de procedimientos.

Art. 50. — Los jueces de sentencia se reemplazarán en caso de recusación o impedimento, conforme a lo que prescribe el Código de Procedimientos en materia criminal.

Art. 51. — Los jueces de instrucción no serán recusables; pero en caso de impedimento podrán ser reemplazados por los jueces de sentencia.

Art. 52. — Los jueces de instrucción podrán transmitir sus órdenes a los comisarios y demás empleados de policía por intermedio del jefe de esta repartición.

CAPÍTULO IV

De los jueces de lo correccional

Art. 53. — Los jueces de lo correccional conocerán en 1ª instancia de los delitos que, según las leyes de procedimientos, corresponden

a la jurisdicción de la Capital y en los que la pena corporal exceda de un mes de duración o la de multa de cien pesos, y no pase de un año de prisión o mil pesos de multa.

Art. 54. — Sus sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia para ante la cámara respectiva.

Sr. Ortiz. — Pido la palabra.

Aquí es donde creo que debe agregarse este artículo, que voy a leer, correlativo del que se ha sancionado y que lleva el número 6 en el proyecto.

«Conocerán en segunda y última instancia los jueces de lo correccional de los recursos interpuestos contra las municipalidades o policía cuando la pena impuesta no exceda de cinco días de arresto o de veinte pesos de multa.»

Los señores senadores recordarán que en el artículo 6º se establece que el juzgamiento de las faltas o contravenciones a las ordenanzas municipales o de policía, corresponde respectivamente a cada una de estas administraciones, cuando la pena no exceda de un mes de arresto o de cien pesos de multa.

Yo creo que no debe dejarse sin apelación hasta esta cantidad las resoluciones que respectivamente den las municipalidades y las policías por medio de su autoridad respectiva en este caso, y entonces conviene establecer la apelación para ante los jueces de lo correccional. Es por esta razón que propongo este artículo como 56.

Sr. Juárez Celman. — Podría ponerse más bien como continuación del artículo 53, ahora 54, y decirse: los jueces en lo correccional.

—Se lee el artículo propuesto por el señor senador Ortiz, en esta forma:

Artículo 56. — Conocerán en segunda y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de las municipalidades o de las policías cuando la pena impuesta no exceda de cinco días de arresto o veinte pesos de multa.

Sr. Juárez Celman. — ¿Quiénes conocerán, señor senador?

Sr. Ortiz. — Los jueces en lo correccional.

Sr. Juárez Celman. — Quiere decir que vuelve a ser apelable esta sentencia, porque hay un artículo, el 54, que dice:

«Sus sentencias serán apelables en segunda y última instancia para ante la cámara respectiva.»

Sr. Ortiz. — No, señor; porque el artículo dice que conocerán en segunda y «última» instancia de las resoluciones de las municipalidades, etcétera.

Así es que no pueden ser apelables ante la Cámara de Apelaciones, desde que estos asuntos van en apelación en última instancia ante el juzgado correccional. Cuando se trata de las resoluciones del juez correccional, en primera instancia, entonces hay apelación para ante la cámara.

Sr. Juárez Celman. — Entonces, el artículo es contradictorio, puesto que el artículo 54 dice: sus sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia para ante la cámara respectiva.

Sr. Ortiz. — Para que no haya contradicción, podría ponerse el artículo 54 en esta forma: sus sentencias y resoluciones, «en los casos que conozcan originariamente», serán apelables, etcétera.

—Se vota el artículo propuesto por el señor senador Ortiz y es aprobado, obteniendo igual resultado la modificación introducida en el artículo 55, antes 54.

—Se lee:

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes a los jueces de primera instancia

Artículo 57. — Los jueces de primera instancia serán nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y gozarán del sueldo que les asigna la ley, el cual no podrá ser disminuido mientras permanecieren en sus funciones.

Sr. Juárez Celman. — Veo que aquí dice que los jueces de primera instancia serán nombrados por el presidente de la República. Me parece que debiera decirse por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Sr. Febre. — Este artículo se ha redactado así, imitando a la Constitución que, cuando habla de los nombramientos que atribuye al jefe del Estado, dice: el presidente de la República nombrará tales o cuales funcionarios; de manera que esta redacción está en armonía con lo que dispone la Constitución.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Ya en otra parte de la ley se ha dicho así.

Sr. Juárez Celman. — Creía que la costumbre fuera al contrario. Desisto de mi indicación.

—Se da por aprobado el artículo 57.

—Se lee el:

Artículo 58. — Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano, tener treinta años de edad, haber ejercido en el país la profesión de abogado durante cuatro años o desempeñado por igual término una magistratura o empleo judicial.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿De modo que si tiene más de treinta años no puede ser juez?

Sr. Juárez Celman. — Siendo por nuestra legislación 22 años la mayor edad, estableciendo 30 para ser juez, difícilmente tendríamos buenos jueces. A los 30 años un abogado notable no admitiría ese puesto.

Si es rechazado el artículo, propongo que se diga 25 años por lo menos.

—Se vota el artículo en la forma propuesta por la Comisión y se acepta.

—Se aprueba sin observación los artículos siguientes:

Artículo 59. — Al recibirse del cargo, prestarán juramento ante la cámara respectiva de desempeñarlo fielmente y en conformidad con lo que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación.

Art. 60. — Los jueces de primera instancia darán audiencia diariamente, pudiendo habilitar horas y días feriados cuando los asuntos de su competencia lo requieran, con sujeción a lo que dispongan las leyes de procedimientos. Las audiencias serán públicas, salvo cuando el decoro exija reserva.

Art. 61. — Las resoluciones, órdenes y despachos de los jueces de primera instancia, deberán ser firmados por ellos y autorizados con la firma de un secretario.

—Se lee:

Artículo 62. — Los incidentes de menor cuantía de que deben conocer en primera instancia los jueces de lo civil y de lo comercial, se substanciarán en la forma determinada por el artículo 9º, y sus resoluciones sólo serán apelables en relación, sea cual fuere la naturaleza del juicio, siendo inapelables todas las que versen sobre una suma menor de 100 pesos.

Sr. Ortiz. — Creo que sería más exacto y más comprensivo decir: «los asuntos de menor cuantía» porque la palabra «incidentes», es muy restringida.

Sr. Carrillo. — Creo que lo mejor es suprimir este artículo, porque no hay asuntos de menor cuantía, que conozcan los jueces de primera instancia, dadas las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de la Comisión respecto a las atribuciones que tendrán los jueces de paz.

Sr. Febre. — Podría corregirse el artículo diciendo en segunda instancia, en apelación.

Sr. Carrillo. — Eso está establecido ya en otro artículo del proyecto.

Sr. Baibiene. — Creo que este artículo está mal aquí, no es de la naturaleza de esta ley: es un artículo que corresponde a la ley de procedimientos. Establece la forma en que se han de substanciar los incidentes que vienen en apelación a los jueces de primera instancia.

Supone el artículo que estos jueces deben entender, por disposición de la ley misma, y entonces la ley establece la forma en que han de substanciarlos.

Este artículo no es pues de la naturaleza de esta ley; corresponde a la ley de procedimientos.

Sr. Presidente. — ¿Propone el señor senador que se suprima?

Sr. Baibiene. — Sí, señor.

Sr. Ortiz. — No tiene razón de ser este artículo después de la supresión que hemos hecho hace un momento.

—Se vota el artículo y es rechazado.

Sr. Presidente. — Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, continuando la sesión pocos momentos después.

—Se aprueban sin observación los artículos siguientes:

Artículo 63. — Cada juzgado tendrá para el despacho de los asuntos el número de los secretarios que por la ley se determine.

Art. 64. — Los jueces de primera instancia tendrán facultad para reconvenir y penar las faltas contra su autoridad y decoro, ya sea que se cometan en las audiencias o en los escritos, pudiendo dictar apercibimientos e imponer hasta 30 días de arresto o 100 pesos de multa según los casos.

Art. 65. — Los jueces de primera instancia podrán corregir a los secretarios y demás subalternos de sus respectivos juzgados con apercibimientos, suspensión temporaria que no exceda de un mes o multas que no excedan de 100 pesos por faltas en el ejercicio de sus funciones.

Art. 66. — Podrán asimismo imponer correcciones de apercibimientos y multas que no excedan de la cantidad fijada en el artículo anterior a los jueces de paz, por desacato o desobediencia a su autoridad, pudiendo estos funcionarios apelar para ante la Cámara respectiva.

Art. 67. — Trimestralmente pasarán a la cámara correspondiente una relación que contenga el movimiento de sus juzgados, expresando el número de asuntos iniciados, terminados y de las providencias y sentencias dictadas, debiendo en cuanto a estas últimas, expresarse los asuntos en que hubiesen recaído. Los jueces de primera instancia deberán además expresar en dicha relación el estado de cada causa.

Art. 68. — Cada uno de los juzgados de primera instancia tendrá un oficial de justicia con el sueldo que determine la ley de presupuesto.

Art. 69. — Los juzgados tendrán los ordenanzas necesarios para su servicio. Los oficiales de justicia y ordenanzas serán nombrados por los jueces respectivos y removidos por los mismos.

Sr. Carrillo. — Propongo a la Comisión que suprima la segunda parte de este artículo. La manera de proveer los empleos para el mejor servicio de los juzgados de primera instancia, la enuentro establecida en el artículo 91 de este proyecto. Consignarla aquí sería una contradicción con lo que determina el artículo a que me refiero que dice: «Cada cámara nombrará su secretario y demás empleados, y los secretarios y empleados de los jueces de primera instancia según corresponda a su jurisdicción y a propuesta de los jueces. La Cámara de lo Civil nombrará los secretarios y demás empleados de los juzgados de paz a propuesta de los jueces.»

Sr. Febre. — Y el primero, ¿a qué empleado se refiere? Se refiere a los secretarios.

Sr. Carrillo. — Se refiere a todos.

Sr. Febre. — El otro artículo se refiere a los empleados subalternos.

Sr. Carrillo. — A los oficiales de justicia.

Sr. Febre. — A los ordenanzas, etcétera.

Sr. Carrillo. — ¿Y a cuáles se refiere el artículo que acaba de leerse?

Sr. Febre. — A los secretarios.

Sr. Carrillo. — Y «los demás empleados» dice

el artículo; no hay otros que los oficiales de justicia y los ordenanzas.

Sr. Febre. — Aquí en el artículo...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Se refiere a los empleados de los juzgados de paz el artículo 91.

«La Cámara de lo Civil nombrará los secretarios y demás empleados de los juzgados de paz a propuesta de los jueces.»

Sr. Cambaceres. — Pero antes dice, señor ministro: «Cada cámara nombrará su secretario y demás empleados de los jueces de primera instancia según corresponda a su jurisdicción y a propuesta de los jueces.»

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Habría que cambiar eso a su tiempo, porque, a la verdad, es ridículo que la cámara tenga que nombrar los ordenanzas de un juzgado.

Sr. Carrillo. — Podría ponerse como está en la ley vigente. La ley vigente dispone que los jueces nombren los ordenanzas, pero no los oficiales de justicia que son nombrados por la Cámara de Apelaciones.

Si a los jueces de paz no se les acuerda el derecho de asociar a su trabajo personas de su íntima confianza, es más natural que esta limitación se establezca para los de primera instancia.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Entonces este artículo podría quedar así: «Los juzgados tendrán los ordenanzas necesarios para su servicio que serán nombrados por los jueces respectivos.»

Sr. Carrillo. — Perfectamente.

Sr. Cambaceres. — «Y removidos por los mismos.»

Sr. Secretario. — «Los juzgados tendrán los ordenanzas necesarios para su servicio, nombrados por los jueces respectivos.»

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — «Que serán nombrados y removidos por los jueces respectivos.»

—Se aprueba en esta forma:

«Los juzgados tendrán los ordenanzas necesarios, que serán nombrados y removidos por los jueces respectivos.»

—Se lee.

TITULO IV

De las Cámaras de Apelaciones

«Artículo 69. — Habrá dos Cámaras de Apelaciones, una en materia Civil y otra en materia Criminal, Correccional y Comercial.»

Sr. Zapata. — Pido la palabra para proponer a la Comisión una modificación en este artículo.

En lugar de una Cámara Civil, debe haber dos.

Voy a dar a la Honorable Cámara los antecedentes que tengo para proponer esta reforma.

Es del dominio público, señor presidente, la tardanza que sufre el despacho de los expedientes que están pendientes de la Cámara en lo Civil.

El Honorable Senado sabe que antes de ahora el despacho de estas causas civiles estaban a cargo de una cámara compuesta de dos salas; de manera que podía considerarse que eran dos cámaras las que tenían a su cargo el despacho de todos estos asuntos.

El crecimiento de la población no se puede poner en duda, y por consiguiente, el aumento de asuntos que vayan a la cámara. No se explica que habiendo estado esta cámara dividida en dos salas, y siendo, por consiguiente, dos cuerpos, dos tribunales, los que despachaban todos los asuntos civiles, hoy se quiera que una sola cámara, compuesta de cinco miembros, es decir una cámara más pesada en sus movimientos, pueda expedirse, si no con la misma facilidad y prontitud que antes, con mayores, como debiera ser, dadas las necesidades del país.

Como yo no practico, señor presidente, ante los tribunales de la Capital, tengo que referirme a los números, a la estadística proporcionada por la misma Cámara de Apelaciones, respecto del movimiento que hay en estos tribunales.

En el año 83 los tribunales, que eran provinciales, habían dejado, para que fueran tratados por los tribunales que pasaban a ser de la Nación, un considerable número de expedientes.

Sr. Febre. — ¿Cuántos eran?

Sr. Zapata. — Le voy a dar el dato.

De manera que, agregados a los que habían entrado el año anterior, pasaban al año 84 quinientos cuarenta y dos expedientes. Esta era la existencia del año 83, que pasaba al año 84.

En el año 84 entraron a la misma cámara ochocientos veintitrés expedientes; de manera que tuvo para despachar mil trescientos sesenta y cinco.

La cámara dió ciento once sentencias definitivas y cuatrocientas noventa y tres interlocutorias, formando un total de seiscientas cuatro resoluciones.

De modo, pues, que pasaban al año 84 setecientos sesenta y un expedientes, de los cuales siempre figuran cuatrocientos, más o menos, de sentencias definitivas, es decir, casi igual número de las que recibieron en el año 83.

De modo, señor presidente, que está palpante o claro que quedan en esa cámara de año a año cuatrocientos expedientes que están esperando sentencia definitiva, y si la cámara no puede dar sino ciento quince sentencias definitivas y el retardo que tiene es de cuatrocientos expedientes, fácilmente se comprende que pasarán años y años, y tendrá siempre cuatrocientas y tantas sentencias definitivas que dar, es decir, ochocientos y tantos litigantes esperando la resolución.

No hay razón, señor presidente, para que, cuando estamos tratando de organizar la administración de justicia, y sabiendo que es deficiente su organización, no salvemos esas deficiencias.

Quiero agregar a mi palabra la opinión de la Cámara de Apelaciones, al dirigirse al señor ministro en su memorial anual.

La Cámara de Apelaciones dice: «Asimismo, luchando con todas estas dificultades, la cámara ha conseguido llegar al número de 111 sentencias definitivas, entre las cuales hay algunas de tal gravedad y extensión, que representan un mes de trabajo para cada uno de los jueces y pueden llenar un libro con sus fundamentos, y 493 sentencias interlocutorias, lo que da un resultado de 55 sentencias por mes.

«Si esto no es bastante para llenar las necesidades de la administración de justicia, atendido el gran número de causas que suben en apelación y el considerable número de causas que recibió esta cámara de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, ella cree haber llenado su deber en la extensión en que le ha sido posible en la medida de sus fuerzas, y abriga la convicción de que su trabajo no ha sido jamás superado por ningún otro tribunal colegiado en la República.

«Algo más debo agregar para justificar la previsión de esta cámara librándola de toda responsabilidad en el retardo de las causas pendientes ante ella, que desde su institución y tan pronto como tuvo conocimiento del número de expedientes que le pasaron los tribunales de la provincia (731) la mayor parte para definitiva, comprendió que era imposible que una sola cámara de cinco miembros, más pesada en sus movimientos, hiciera el despacho que no habían podido hacer dos cámaras de tres miembros, y se apresuró a manifestarlo a vuestra excelencia, indicando las reformas que creyó necesarias para poner a los tribunales de la Capital en condiciones de estar al día en su despacho.»

Y más adelante indica cuál es el temperamento que, a su juicio, debe adoptarse para salvar esta deficiencia.

Dice: «La justicia de paz administrada por jueces letrados, extendiendo su jurisdicción hasta la suma de mil pesos, y el aumento de los tribunales superiores ya sea creando otra cámara de cinco miembros o un gran tribunal de nueve miembros, dividido en tres salas, con jurisdicción para fallar en definitiva siempre que hubiese tres votos conformes, son las ideas fundamentales de esa reforma.

«Lo primero disminuirá el número de las causas de mayor cuantía, y por consiguiente el de las apelaciones ante los tribunales superiores, con beneficio manifiesto para los litigantes, pues es indudable que un pleito cuyo valor no exceda de mil pesos, no puede soportar los gastos y las dilaciones del procedimiento escrito.

«Lo segundo duplicará o triplicará las fuerzas del tribunal de apelación, según la idea que prevalezca, y lo pondrá en condiciones de poder librarse alguna vez del oneroso legado de expedientes atrasados que recibió de sus predecesores y de poner al día el despacho de las nuevas causas.

«La cámara cumple una vez más con su deber encareciendo a vuestra excelencia la necesidad de la sanción de esas reformas u otra tendiente al mismo resultado que merezca la aprobación del Honorable Congreso, pues no es posible que Buenos Aires con una población de cuatrocientos mil habitantes, continúe un año más con un sólo tribunal de apelaciones para entender en lo civil en todas las causas cuyo valor exceda de trescientos pesos.»

Es pues, la Cámara de Apelaciones, confesándose morosa en el despacho de los expedientes, que solicita la reforma de su organización, ya sea aumentando el número de miembros, para dividirlos en salas, o ya sea aumentando otra cámara.

Para convencerme; señor presidente, de la exactitud, y para traer algunos informes al Honorable Senado sobre este asunto, ocurrió a la Cámara de Apelaciones, y he oído a sus cinco señores vocales.

Todos ellos están contestes en que materialmente no podrán despachar este cúmulo de expedientes que vienen atrasados desde varios años, despachando ciento veinte causas definitivas esa cámara y teniendo atrasados cuatrocientos expedientes para sentencia definitiva. Materialmente es imposible que alguna vez lleguen a despachar todos los expedientes, como debe ser, y estar al día.

Sé, señor presidente, que la Comisión me va a contestar observando que por este proyecto se crean los jueces de paz letrados.

Esta misma observación hice a los miembros de la Cámara de Apelaciones y ellos me contestaron, con la estadística por delante, que de todos los expedientes que tenían presente o a la mano no habría un diez por ciento que correspondiese a la justicia de paz, sancionando el proyecto en la forma que se presenta. De manera que, señor presidente, aunque estos jueces de paz funcionen en la Cámara de Apelaciones no va a disminuir el trabajo. Por el contrario, con el crecimiento de la población, ha de aumentar día por día.

Volví otra vez a preguntar, a pesar de estar manifiesta la opinión de ellos en la memoria, por cuál de estos temperamentos estaban: si por crear tres salas o por crear otro tribunal más, e inmediatamente me dijeron que estaban por otro tribunal más, compuesto de cinco miembros.

La razón es ésta: si fueran tres salas de tres miembros no habría, para la resolución de las causas, la garantía que da un tribunal compuesto de cinco vocales.

Si los movimientos en un tribunal de cinco miembros son pesados, puede administrativamente dividirse el trabajo por turnos, porque estas dos cámaras, componiéndose cada una de cinco, podría una de ellas recibir expedientes durante tres meses y la otra, mientras tanto, estar dictando sentencias definitivas; porque es de advertir, señor presidente, y todos los señores senadores saben, que lo que más quita el tiempo en un tribunal de esta clase son los decretos diarios que tiene que estar poniendo el presidente, el cual forma también parte de este tribunal, para dar audiencias, oír vistas y dictar sentencias. Basta ver los resúmenes de estos decretos, para comprender la verdad de lo que digo. Entre escritos, resoluciones, decretos de trámite, relaciones, posiciones, notas, legalizaciones, etcétera, en que necesariamente tiene que intervenir el presidente, hay mil doscientas ocho diligencias o actos en sólo seis meses.

De manera que serían 2.400 ó 2.500 en un año.

Si el presidente tiene que estar interviniendo en todos estos asuntos diariamente, no puede dedicar el tiempo bastante a las sentencias definitivas, mientras que si se deja que las cámaras resuelvan por turno, una sola estará ocupada de todas estas resoluciones que quitan el tiempo diariamente, y la otra se ocuparía nada más que de sentencias definitivas.

Yo creo, señor presidente, con la Cámara de Apelaciones, que no hay otro medio para llegar

a ponerse al día en el despacho de estos asuntos, que el que se indica.

Por este proyecto, se trata de poner al día todos los asuntos de menor cuantía; y no creo que haya justicia en dejar, a sabiendas, sin una pronta administración de justicia los juicios de mayor cuantía.

Una economía en este sentido, la considero mala economía. Se ventilan en expedientes que están ante una cámara, millones y millones, y lo que se va a economizar no es nada, con relación a esta cantidad.

Por estas razones pido a la Comisión que acepte mi indicación.

Sr. Febre. — ¿De qué fecha es ese memorial?

Sr. Zapata. — Da cuenta del movimiento habido el año 1884.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

Como manifesté en mi informe, al someter a la consideración del Senado el proyecto en discusión, hace años que la Comisión de Legislación viene estudiando este asunto que lo cree de mucha gravedad y de gran transcendencia para la capital de la República. Se han renovado las comisiones en el Senado, y todas las de este ramo han concurrido a estudiar este proyecto, hasta que al fin la actual lo ha sometido a la Cámara y ésta lo ha tomado en consideración, creyéndolo en buenas condiciones.

El año pasado, cuando la Comisión se ocupaba del despacho de este asunto, en el deseo de introducir en la ley orgánica vigente todas las reformas que la práctica había aconsejado, se trasladó la Comisión, en cuerpo, a la casa de los tribunales de la Capital; estuvo en una larga sesión con la Cámara de lo Criminal que también pedía aumento de vocales, como lo pide la Cámara de lo Civil; vió el estado del despacho diario, y encontró que la Cámara de lo Criminal estaba al día, no estaba retrasada en el despacho de los asuntos.

Sin embargo de esto, ella siempre persistía en el aumento de personal, seguramente porque será más cómodo que haya mayor número de vocales a fin de poder disminuir la responsabilidad en los asuntos que se resuelven; pero la Comisión dijo entonces a la Cámara que no creía necesario el aumento de personal y que no lo propondría.

No tuvo oportunidad de hablar con los miembros de la Cámara de lo Civil, porque ésta había cerrado su despacho, no obstante de saber que una Comisión del Senado estaba visitando las cámaras de apelación. Así es que no pudo oír los informes que ella deseaba ni hacer las interrogaciones que la Comisión hubiera

creído convenientes para el mejor desempeño de su cometido.

Sin embargo, habló con el secretario de la Cámara de lo Civil, y del estado que le dió a conocer, resultaba que había setecientas causas retardadas.

Estos asuntos están retardados, como lo ha dicho el señor senador por Mendoza, desde la época en que esta ciudad era capital de la provincia de Buenos Aires; son asuntos rezagados que quedaron de aquella cámara provincial y que pasaron a la cámara creada por la ley orgánica de los tribunales para el servicio exclusivo de la capital de la República.

Deseando, pues, la Comisión aproximar la época de que la cámara se ponga al día en esos asuntos retardados y que recibió cuando se federalizó este municipio para asiento de las autoridades nacionales, proyectó de acuerdo con el señor ministro del ramo, la reforma de establecer la justicia de paz servida por letrados.

Según los informes que ha oído la Comisión de personas competentes y también de algunas que han desempeñado las funciones de vocales de las cámaras de la Capital, se cree que, con esta reforma, se disminuye los asuntos que van en apelación a la cámara, por lo menos en una mitad.

De manera que si se consigue disminuir en una mitad los asuntos que van en apelación diariamente a la cámara, fácilmente se comprende que ella tiene entonces mucho más tiempo para dedicarse al despacho de los asuntos retardados, y entonces, en vez de ciento y tantas resoluciones que dicta en un año, lo que, a mi juicio, no arguye una gran laboriosidad por parte de la cámara, podría dictar dos o trescientas, seguramente, una resolución por día, sobre esos asuntos retrasados. Así, fácilmente la cámara se pondría al día, y no habría necesidad de este aumento de personal.

Hace un momento, señor presidente, mi honorable colega el señor senador por Jujuy, hacía con justa razón algunas observaciones respecto del aumento de personal en los tribunales de lo criminal y en primera instancia, fundado tal vez en lo innecesaria que era esta reforma y también en la conveniencia de no hacer mayores gastos, dada la situación angustiosa del tesoro.

Esta razón de las dificultades porque atraviesa la hacienda pública, milita tanto para los jueces de primera instancia como para los vocales de la Cámara de Justicia, si no hay una necesidad bien sentida de aumentarlos, y la Comisión cree que con las reformas que proyecta, no está lejano el momento en que la Cá-

mara de lo Civil esté al día en su despacho, por cuya razón considera innecesario el aumento de vocales.

Es sabido, señor presidente, que mientras son más numerosos los cuerpos colegiados que tienen que resolver en cualquier asunto, en proporción al número, se retarda el despacho del mismo.

Tanto es así, que en muchas de las naciones europeas se trata de disminuir en lo posible el número de los miembros de los tribunales.

Sr. Juárez Celman. — No se propone aumento en este caso: se forman dos cámaras no más.

Sr. Zapata. — Otra cámara igual a la que aconseja la Comisión.

Sr. Febre. — No da resultados, puesto que el retardo en el despacho de los asuntos, viene del servicio que desempeñaban dos cámaras de la provincia...

Sr. Juárez Celman. — Lo que he dicho era para contestar el argumento que hacía el señor senador de que cuanto mayor es el número de los miembros de un tribunal, mayores son también los inconvenientes para la brevedad en el despacho de los asuntos.

Sr. Febre. — Creía que proponía aumentar el número de los vocales.

Sr. Juárez Celman. — No, señor: hacer dos cámaras, porque es imposible que ningún tribunal del mundo dé una sentencia por día.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿Por qué?

Sr. Juárez Celman. — Tendría que dar más de treinta sentencias mensuales, más de una por día, descontando los días de fiesta...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿Por qué no?

Sr. Juárez Celman. — Porque no es posible; porque es necesario consagrar a los intereses públicos y a los intereses particulares todo el estudio y la meditación debidos.

Sr. Zapata. — Pido la palabra.

El señor senador por Entre Ríos dice que la cámara no despacha lo suficiente, dando sólo ciento once sentencias al año; que bien pudiera dar una sentencia al día.

Me llama sobremanera la atención que el señor senador, que es abogado, crea que una sentencia en asuntos definitivos, pueda darse diariamente, atendiendo también diariamente al servicio de la misma cámara.

El tiempo material, señor presidente, para leer un cuerpo de autos falta en un día, y no se puede, en asuntos que van a verse en última instancia, fallar por la sola lectura; hay que hacer el estudio de ellos, que consultar libros, y por lo mismo que son expedientes antiguos,

no es la legislación más moderna la que les rige, y entonces requieren mayor estudio.

Esos expedientes rezagados, y sobre esto llamo la atención del señor senador, son los de más difícil despacho. ¿Por qué? Porque no son las leyes que actualmente nos rigen las que generalmente han de aplicarse a esos asuntos; y esos asuntos, regidos por las leyes antiguas, son precisamente los más difíciles.

Por otra parte, no puede exigirse a un cuerpo colegiado de cinco vocales que dé una sentencia definitiva diaria, y yo iría más lejos, en obsequio del buen servicio y de las garantías para los litigantes; iría hasta disponer que no diera una sentencia diaria, sino una por semana. Yo estaría satisfecho con eso, porque entonces habría verdadera garantía para los litigantes.

No son asuntos insignificantes los que van en apelación ante esas cámaras...

Sr. Febre. — Son seiscientos pesos.

Sr. Zapata. — Mil pesos es el máximo en que va a conocer el juez de paz letrado.

Sr. Febre. — De hoy en adelante.

Sr. Zapata. — Perfectamente; y esa interrupción me hace recordar otro dato que no he tenido presente al determinar mis observaciones.

El señor senador dice que un cincuenta por ciento de los expedientes rezagados en la Cámara de Apelación corresponderá a la justicia de paz.

Está en un verdadero error el señor senador, dados los datos que me ha suministrado la cámara, que conoce esos expedientes y que los tiene para resolver.

Sr. Febre. — Me he referido a datos de personas que han desempeñado las funciones de vocales de la Cámara en lo Civil, y a datos de abogados que actúan y desempeñan sus funciones profesionales ante esa cámara y que conocen más o menos cuáles son los asuntos que van en apelación, cuáles son de mayor cuantía y cuáles de menor cuantía.

Yo me referí a esos informes.

Y decían — me refiero a ese informe — esos señores abogados que han desempeñado funciones de miembros de la cámara, que con esta reforma se disminuiría en un 50 % las actuaciones que van actualmente a la cámara.

Es esto lo que yo he manifestado refiriéndome al informe tomado de abogados que han desempeñado funciones de camaristas.

Sr. Zapata. — Por lo que se ve mis informes son más modestos que los del señor senador. He estado con el personal de esta cámara el

sábado de la semana pasada, y me han manifestado que el 10 % de estos expedientes corresponderían en adelante a los jueces de paz. Pero quiero suponer que un 20 % correspondan a los jueces de paz. ¿Se va a conseguir de esa manera que disminuyan los expedientes que necesariamente tienen que aumentar con relación a la población? ¿Se va a conseguir por esa disminución que dejen de entrar 388 expedientes por semestre, como han entrado en el semestre que acaba de transcurrir de este año?

Sr. Febre. — ¿Me permite una interrupción? Fíjese el señor senador que los asuntos retardados están en igual número a los que dejó la cámara de justicia provincial y han transcurrido ya varios años.

Sr. Zapata. — Perfectamente, y ese transcurso de varios años le demuestra al señor senador que la cámara actual no ha podido disminuir esos expedientes. Se necesita otro tribunal de igual número de miembros o bien aumentar el actual para que pueda dividirse en tres cámaras. Debe creer el Honorable Senador que el interés que para mí hay en esta modificación, es el interés general de la población. Cualquiera de mis honorables colegas que hable con abogados de práctica, en la Capital, no recibirá de ellos noticia de cuántos expedientes hay en la cámara, esto no pueden decirle; lo único que le dirán es esto: sacar los asuntos de los juzgados de primera instancia y llevarlos a la Cámara de Apelaciones, es un recurso, porque allí se demoran años y años, y eso no es bueno; la justicia debe administrarse pronto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No se puede negar, señor presidente, que hay obstrucción en la Cámara en lo Civil, en el despacho de los expedientes que a ella van. Esto depende en parte de la naturaleza misma de las causas, del número de expedientes que van; en su mayor parte del procedimiento que se sigue para el despacho, y en otra parte también, según mi creencia, de la falta de método para la tramitación de estos asuntos, falta de método contraído por la costumbre que ha creado el procedimiento en vigencia. En el discurso del señor senador por Mendoza hay algunas inexactitudes que es bueno tener presente para que no sirvan de base a nueva argumentación. No es cierto que la población de Buenos Aires sea de 400.000 almas.

Sr. Zapata. — Ese es el informe de la cámara y está consignado en la memoria.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No es exacto que la población de

Buenos Aires sea de 400.000 almas, es muy dudoso que llegue a 300.000. Los demás argumentos que ha aducido el señor senador también servirán para demostrar que no debe hacerse un aumento en el número de las cámaras, porque los argumentos tienen que tomarse como verdaderos y hacerse entonces la reforma proporcionada a la magnitud de los argumentos y a lo que se exige con cada argumento. Si en virtud de un argumento yo exijo ocho y solamente se me conceden dos, no está alcanzado el objeto del argumento. Si el señor senador afirma que entran en cada semestre 388 causas y sostiene por otro lado que una cámara no puede despachar sino cuando más una sentencia por día...

Sr. Zapata. — No, señor. Sostengo que llegaría hasta prohibir que despachara una por día y que solamente debía despachar una por semana.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Entonces debería proponer el señor senador que hubiera cuarenta cámaras para que estuviera en relación su proposición con el número de expedientes que entra al despacho. Con aumentar una cámara entonces no se hace nada.

Voy a decirle al señor senador de qué depende en gran parte este retardo en la expedición de la cámara. Según la ley de procedimiento debe estudiar cada uno de los miembros el expediente, fundar su opinión, y fundarla extensamente, y la cámara no olvida esta prescripción; la funda extensamente, demasiado extensamente, y mejor y más conveniente sería que la fundara con brevedad. Un juicio por ser más extenso no es más seguro.

Sr. Juárez Celman. — La extensión es cuestión de apreciación.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — La extensión en esta clase de sentencias es perjudicial y es anticuada: los jueces no deben hacer sentencias tan largas.

Sr. Juárez Celman. — Deben hacerlas como las recetas.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es mejor, son más eficaces cuando más cortas. Un alcaloide es más eficaz que la triaca que tiene cuarenta renglones.

Sr. Juárez Celman. — El señor ministro juzga con el criterio del médico y no con el criterio del abogado. Se requiere meditación.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — La meditación no impide que la sentencia sea corta.

Sr. Juárez Celman. — Además, el Poder Ju-

dicial es independiente y ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, aunque tengan el derecho de fijar por leyes el personal de aquél y establecer el procedimiento, no pueden penetrar hasta indicarle cómo ha de hacer el estudio de los asuntos de su competencia. Es un poder independiente.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero más independiente es el poder de la crítica, más independiente es el legislador que tiene que dar las razones en que funda su opinión para legislar en un sentido o en otro. Es cierto que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, pueden entrometerse en el modo como el Poder Judicial ha de dictar las sentencias, pero en la ley puede señalar los defectos del procedimiento en los juicios y es necesario que los corrija. Indudablemente no hay tribunal que baste ni número de cámaras suficientes si cada juez escribe un libro para dictar su sentencia, porque entonces no habría límite posible. Si fuera tanto más meritorio un juez cuanto más largo hiciera su dictamen, cada miembro de la cámara escribiría tres volúmenes en cada sentencia; la sentencia sería muy bien meditada, formaría un cuerpo de doctrina excelente, pero no se darían más que media docena de sentencias al año y se defraudaría el fin de esa alta institución.

Sr. Juárez Celman. — Cuando se pide un informe al Consejo de Higiene sobre las medidas higiénicas que deben adoptarse es porque ese cuerpo tiene mejor criterio que los jueces, por ejemplo, para darlo, y así también se pide a los miembros de la Cámara de Justicia informe sobre el personal que necesita, porque son ellos los más competentes para darlo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — El señor senador olvida que estoy haciendo la enumeración de las causas que explican el retardo de la cámara en el despacho de los expedientes, y que he señalado entre esas causas la extensión con que fundan su dictamen los jueces, quizá y seguramente contra la opinión y los deseos de ellos mismos, y realmente por la exigencia del procedimiento. Además, la estadística, cuando debe servir de base para hacer argumentos positivos, es necesario que sea muy clara y que cada cifra no represente ni más ni menos de lo que debe representar.

Se dice: 500 sentencias definitivas, 200 interlocutorias, y se hace figurar cada uno de los elementos de estas cifras, como si fueran iguales entre sí, cuando hay sentencias de las cua-

les se puede dar diez, veinte, y quizá treinta por día, porque una sentencia no es más que un juicio sobre una cuestión, y un hombre medianamente habilitado en su sistema cerebral, medianamente ilustrado, puede hacer treinta juicios por día.

Sr. Juárez Celman. — ¡Así serán ellos!

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Habrá algunas sentencias que merezcan mucho estudio; sin embargo, yo sufro grandes aflicciones cada vez que oigo decir: «necesito meditar» y pienso en seguida: este hombre vacila, no tiene seguridad en su juicio. Los que bien conciben, bien se expresan; si hay facilidad en la concepción, hay necesariamente facilidad para emitir el juicio.

Sr. Juárez Celman. — Hay que estudiar los expedientes y aplicarles el derecho.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No faltan individuos que mediten una hora sobre un tabla de multiplicar, buscando que dos por dos son cuatro. Hay casos que son tan evidentes como las fórmulas y sobre ellos los jueces, los abogados, no necesitan meditar. Además, si se acepta la disculpa, no habrá límite posible: un juez necesitará un día para meditar, otro cuatro, otro media hora, otro un minuto. ¿Cuál será el tiempo que deba asignarse a cada miembro de la Cámara, para meditar cada sentencia? Creo necesario establecer algún límite.

Tenemos, pues, causas de obstrucción en el despacho de la cámara, primero, el procedimiento; segundo, el abuso de las apelaciones y la facilidad con que la cámara las acepta. Esta facilidad tiene por causas, entre otras, que la cámara no ve los asuntos que entran. Habrá muchos asuntos que, con sólo verlos, los rechazaría o los resolvería, pues la sola lectura basta para su resolución. Pero, ¿cómo va a despacharlos si no los ve? Son asuntos nuevos de que no se da cuenta: todas las apelaciones son aceptadas y luego entran a figurar en el número de las causas, se consignan en la memoria de la cámara, y hacen peso luego en el ánimo del Congreso y del Poder Ejecutivo y al fin, son apelaciones insignificantes, asuntos triviales, que bastaría leerlos para resolverlos.

Hay, pues, malos hábitos, puede decirse con verdad, y según la opinión de los abogados de Buenos Aires no hay propiamente justicia. Se sabe que llevar un asunto en apelación a la cámara, es lo mismo que enterrarlo. Asuntos que, según el Código de Procedimientos vigente, deberían forzosamente ser resueltos en quince días hace tres años que están en la cámara:

y esto no puede ser efecto sino de que la cámara no los ha visto, y no los ha visto porque tiene otros asuntos de más importancia que despachar.

Sr. Zapata. — A eso provee mi indicación.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero la indicación del señor senador no tiene límites, porque se basa en este argumento: no se puede dar más que una sentencia definitiva, por día.

Pocas o ninguna se daría, si se leyeran los expedientes en todas sus partes; pero los abogados saben perfectamente que un expediente que asusta a cualquiera por lo voluminoso, lo leen en dos o tres minutos, porque saben lo que han de buscar y lo que han de leer, y los jueces saben esto con más razón.

Uno de los miembros del Congreso actualmente, que ha sido miembro de la Cámara de lo Civil y que contribuyó a presentar el proyecto de reformas que fué enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, ha cambiado de opinión, respecto a la organización de las Cámaras de lo Civil y cree ahora que basta la cámara, si se hacen las reformas que se proyectan por esta ley, para despachar todos los asuntos.

Por esta ley, se disminuye el número de asuntos que van a los juzgados de primera instancia, se disminuye el número de asuntos apelables, y sobre todo por el proyecto de procedimientos, que se hallará en la Cámara de Diputados, y que será sancionado probablemente este año, se disminuye el número de los casos de apelación, que es lo que da margen a esas pomposas estadísticas.

Con esos elementos la cámara tendrá lo suficiente para poder expedirse, sobre todo, si pone mayor actividad.

Porque debe tenerse también en cuenta lo siguiente. Por estudiar bien un asunto importante, deja de despachar cinco asuntos importantes, lo que es un perjuicio, no un beneficio.

Mejor sería no estudiar muy bien aquel primero y despachar los seis.

Hay otro argumento poderoso para no establecer las dos cámaras de lo civil, que funcionan al mismo tiempo, y es este elemento, tan tomado en consideración por los abogados: la unidad de la jurisprudencia.

Yo sé que no es posible la unidad de la jurisprudencia, que los tribunales, que son más cantos en esta materia, no han conseguido tenerla, que los países más civilizados no la han alcanzado: que un tribunal ha sancionado una cosa de un modo y el mismo tribunal, después, ha sancionado la misma cosa de otro modo. En

la pequeña experiencia que se tiene aquí en Buenos Aires, ya me ha informado algún abogado que está al corriente de estas cosas, que se pueden citar casos de contradicción de una misma cámara, con los mismos hombres.

Pero, en fin, es menos chocante eso que lo que puede resultar cuando hay dos cámaras de lo civil que funcionen y hacen la disidencia contemporánea, dejando la posibilidad de que en el mismo día y en asuntos enteramente semejantes, una cámara de lo civil sancione A y la otra B. La contradicción contemporánea es mucho más chocante que esta contradicción de tiempo diferente.

Me he olvidado de establecer también otra de las causas de retardo: las enfermedades de los jueces, que mantienen sin quórum, sin número legal, exigido por la ley de procedimientos, a los tribunales. Esto está fuera del alcance de toda previsión; esto no puede remediarse, y no se remediará con dos cámaras, como no tiene remedio en una.

En definitiva, yo creo, señor presidente, que por estas razones, y también por otras de economía, no debe hacerse alteración al despacho de la Comisión, que debe subsistir una cámara de lo civil, como hay actualmente, y que, con las reformas que se proponen y con otras que vendrán, podrá esta cámara ponerse al día.

He dicho.

Sr. Zapata. — Pido la palabra.

Yo esperaba que el señor ministro en su contestación destruyera en realidad mis observaciones, pero no ha hecho otra cosa que corroborar precisamente lo que he dicho.

Si no es exacto lo que dice la Cámara de Apelación que la población de Buenos Aires tiene cuatrocientos mil habitantes, es exacto que los expedientes que entran, entran en mayor número, y, para mi cálculo y mi raciocinio, me basta saber eso.

Yo he citado al señor ministro y a la comisión el dato suministrado por la cámara, el número de expedientes entrados en este semestre...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero no los ha clasificado, y es insignificante el dato. Entonces, ¿de qué sirve? Algún expediente habrá de recusación de un juez, en apelación... ¡Vaya el asunto tan importante! Si lo ve, la Cámara lo despacha en un momento.

Sr. Zapata. — Pero eso no es sentencia en definitiva.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero habla de expedientes entrados. Por eso digo, el dato del señor senador, que

tomo en cuenta, no es tan pesado como él lo cree. ¿Por qué? Porque no está clasificado. Dice: treinta expedientes. Y digo yo: veintinueve son insignificantes; sin embargo treinta es mucho en realidad.

Sr. Zapata. — Perfectamente. Sería cuestión de apreciación. El señor ministro se inclinaría a apreciar muy insignificante el mayor número, y bien puede ser que sea lo contrario, y debemos ponernos en los dos casos, en garantía de los intereses que se ventilan ante la justicia.

Yo no considero que la administración de justicia debe llevarse de la manera tan breve y tan rápida, como cree el señor ministro. Los expedientes deben leerse; no son oficinas telegráficas los juzgados y Cámara de Apelación; no se despacha un expediente hojeándolo a la ligera. Se crean estas cámaras, como una garantía y que son verdaderos recursos, y siendo un verdadero recurso debe examinarse todo el expediente, todo el procedimiento, la razón porque se apela, etcétera.

Muchas veces, es cierto, la apelación puede consistir en muy poca cosa, en una cuestión muy sencilla, que puede resolverse en dos horas. Pero, no sucede así en la generalidad de los casos, y es preciso que el señor ministro reconozca que las apelaciones, generalmente, son muy difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque los que van en apelación son asuntos de mucha importancia, que soportan todos los gastos que origina la apelación.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — De cualquier incidente se apela.

Sr. Juárez Celman. — ¡Peor para el litigante!

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¡Naturalmente!

Sr. Juárez Celman. — La cámara no tiene la culpa. Si la ley lo autoriza, no puede desecharla la cámara.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Si la ley dijera: «ciertas apelaciones las resolverá en el acto» los litigantes verían que ya ese recurso era ineficaz y no lo emplearían, porque sólo ocasionaría gastos y demoras.

Sr. Zapata. — Es muy posible que en la actualidad la mayor parte de las apelaciones sean insignificantes o meros recursos, y eso debe evitarse. Se apela por todo aquel que quiere ganar tiempo, porque sabe que en la Cámara de Apelaciones va a dormir el asunto y que pasarán años sin resolverse.

Por otra parte, veo que el señor ministro no está muy al corriente en el orden que se observa respecto a los asuntos en estos cuerpos

colegiados; porque dice: en lugar de estudiar un expediente perfectamente, debería despachar los expedientes...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No haga mi argumento incompleto, porque sino no está bien contestado.

He dicho que en lugar de despachar con mucho estudio un expediente, con detrimento de cinco que no se despachan, sería mejor despachar los seis, no tan bien estudiados como el primero, pero despacharlos.

Sr. Zapata. — Perfectamente.

El orden que generalmente se sigue en estos cuerpos colegiados, lo digo porque he presidido una cámara en una provincia, es el orden de entrada. Y no puede hacerse de otro modo, para ser justo.

Si es por el orden de entrada que los expedientes se despachan, no puede tomarse el primero que venga...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero, ¿cómo puede ser así? Si hay asuntos que, por su naturaleza tienen que ser despachados en el día, y, si estos tuvieran que tomarse en consideración por el orden de entrada, recién se tomarían en consideración a los cuatro años.

Sr. Zapata. — Es que el señor ministro confunde lo que es una sentencia definitiva con un auto interlocutorio. Un auto interlocutorio, un recurso de hábeas corpus, por ejemplo, puede despacharse en esa forma; pero, una cuestión de derecho civil, por ejemplo, una cuestión de fondo, no puede despacharse en esa forma; y, para despacharla debidamente, es necesario ver el expediente. Pero es que hay cuatrocientos expedientes, que es necesario leer. Bien puede ser que haya muchos de fácil resolución; pero, hay esto, que pesa sobre la Cámara de Apelación, cuatrocientos expedientes que no se han leído y que hay que leer, fáciles o difíciles.

No quiero cansar más a la Cámara.

Sr. Presidente. — ¿El señor senador propone algún artículo en substitución?

Sr. Zapata. — En lugar de una cámara en lo civil, dos.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba el artículo de la Comisión.

—Así se hace y resulta afirmativa.

Sr. Juárez Celman. — Podría levantarse la sesión; es un poco tarde.

Sr. Presidente. — No habiendo oposición, queda levantada la sesión.

—Así se hace, siendo las 5 y 30 p. m.